

No. 36522

**Spain
and
Panama**

Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Panama on legal assistance and judicial cooperation in criminal matters. Madrid, 19 October 1998

Entry into force: 1 March 2000 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 17

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Spain, 9 March 2000

**Espagne
et
Panama**

Accord d'assistance légale et de coopération judiciaire en matière pénale entre le Royaume d'Espagne et la République du Panama. Madrid, 19 octobre 1998

Entrée en vigueur : 1er mars 2000 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 17

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne, 9 mars 2000

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE PANAMA
SOBRE ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACION JUDICIAL
EN MATERIA PENAL**

El Reino de España y la República de Panamá,

deseosos de mantener y reforzar los lazos que unen a los dos países y particularmente en la esfera de la cooperación mutua en asuntos penales, han decidido suscribir un Convenio a estos efectos, de acuerdo a las disposiciones siguientes:

**TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1**

1. Las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutuamente, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, así como de sus respectivos ordenamientos jurídicos, la asistencia legal y la cooperación judicial más amplia posible en los procedimientos relativos a conductas que en el momento de pedir la asistencia, sean de la competencia de las autoridades judiciales del Estado requirente.

2. El presente Convenio no se aplicará a las detenciones, ejecución de condenas o infracciones o delitos de carácter militar que no constituyan infracciones o delitos con arreglo al Derecho Penal común.

ARTICULO 2

1. Podrá denegarse la asistencia:

- a) si el Estado Requerido estimara que la ejecución de la solicitud podría atentar a su soberanía, su seguridad, orden público u otros intereses esenciales.
- b) si la solicitud se refiere a infracciones o delitos que el Estado Requerido considere como infracciones o delitos de carácter político.
- c) si las infracciones o delitos que motivan la solicitud no son punibles en el Estado Requerido.

2. Toda denegación de asistencia será motivada.

TITULO II

COMISIONES ROGATORIAS

ARTICULO 3

1. El Estado Requerido hará ejecutar en la forma que su legislación establezca, las comisiones rogatorias relativas a un asunto penal que le cursen las autoridades judiciales competentes del Estado Requirente y que tengan como objeto:

- a) la realización de actos de instrucción;
- b) la transmisión de documentos probatorios;

- c) la entrega de objetos, expedientes o documentos;
- d) la notificación de documentos relativos a la ejecución de una condena, el cobro de una multa o el pago de gastos procesales.

2. El Estado Requerido podrá limitarse a enviar copias certificadas conformes de los expedientes o documentos solicitados. No obstante, si el Estado Requirente pidiera expresamente el envío de los originales, se cumplimentará esta solicitud, en la medida de lo posible.

ARTICULO 4

Quando el Estado Requirente lo solicite expresamente, el Estado Requerido le informará de la fecha y lugar de ejecución de la comisión rogatoria. Podrán concurrir al acto las autoridades y las personas interesadas, previo consentimiento del Estado Requerido, de conformidad con lo establecido por la legislación de dicho Estado.

ARTICULO 5

1. El Estado Requerido podrá aplazar la entrega de objetos, expedientes o documentos solicitados, si los necesitase para un procedimiento penal en curso.

2. Los objetos, así como los originales de los expedientes y documentos que hubieran sido remitidos en ejecución de una solicitud de asistencia, serán devueltos lo antes posible por el Estado Requirente al Estado Requerido, salvo que este último renuncie expresamente a dicha devolución.

TITULO III
NOTIFICACION DE DOCUMENTOS PROCESALES Y
RESOLUCIONES JUDICIALES, COMPARECENCIA
DE TESTIGOS, PERITOS Y PROCESADOS

ARTICULO 6

1. El Estado Requerido procederá a la notificación de las resoluciones judiciales y de los documentos procesales que le fueran enviados con este fin por el Estado Requirente. Esta notificación o entrega podrá efectuarse mediante la simple entrega al destinatario, del documento o de la resolución. Si el Estado Requirente lo solicitara de manera expresa, el Estado Requerido efectuará la entrega conforme a las normas establecidas en su legislación para notificaciones análogas o de alguna forma especial, siempre que fuera compatible con dicha legislación.

2. Servirá como prueba de la notificación un recibo fechado y firmado por el destinatario o una declaración de la autoridad competente del Estado Requerido, que consigne el hecho, la forma y la fecha de la entrega o de la notificación. Cualquiera de estos documentos será remitido inmediatamente al Estado Requirente.

3. Si la entrega o la notificación no hubiera podido efectuarse, el Estado Requerido pondrá inmediatamente el motivo en conocimiento del Estado Requirente.

4. Las citaciones de comparecencia dirigidas a un acusado que se encuentre en el territorio de uno de los Estados deberán transmitirse con una antelación mínima de 30 días antes de la fecha fijada en la comparecencia. Para tal efecto, el Estado Requirente deberá enviar su solicitud al Estado Requerido con suficiente antelación, que permita al Estado Requerido cumplir con el término de 30 días establecido.

ARTICULO 7

El testigo o perito que no hubiera obedecido a una citación de comparecencia, cuya entrega se hubiera solicitado, no podrá ser objeto de ninguna sanción o medida coercitiva, aunque dicha citación contenga un mandamiento, a no ser que en fecha posterior entrase voluntariamente en territorio del Estado Requirente y fuese citado de nuevo en debida forma.

ARTICULO 8

1. Las indemnizaciones, así como los gastos de viaje y de estancia serán pagados al testigo o al perito por el Estado Requirente, según las tarifas y los reglamentos vigentes en dicho Estado, calculándose las mismas a partir de la salida del lugar de su residencia.

2. Si el estado Requirente estimase especialmente necesaria la comparecencia personal ante sus autoridades judiciales, de un testigo o de un perito, lo hará constar así en la solicitud de entrega de la citación y el Estado Requerido comunicará a dicho testigo o perito la citación. El Estado Requerido dará a conocer la respuesta del testigo o del perito al Estado Requirente.

3. En el caso previsto en el párrafo 2 del presente artículo, en la solicitud o la citación deberá mencionarse el importe aproximado de las indemnizaciones que hayan de pagarse, así como la de los gastos de viaje y de estancia que hayan de reembolsarse.

ARTICULO 9

1. Toda persona detenida cuya comparecencia personal como testigo o para un careo hubiese sido solicitada por el Estado Requirente será trasladada temporalmente al territorio donde deba tener lugar el interrogatorio, con la condición de devolver al detenido en el plazo indicado por el Estado Requerido y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 10 en la medida en que fueran aplicables.

2. La persona trasladada deberá permanecer en prisión preventiva en el territorio del Estado Requirente, a no ser que el Estado requerido solicite su puesta en libertad.

3. Podrá denegarse el traslado:

- a) si la persona detenida no consintiera;
- b) si su presencia fuera necesaria en un procedimiento penal en curso en el territorio del Estado requerido;
- c) si su traslado pudiera prolongar su detención o,
- d) si consideraciones imperiosas se opusieran a su traslado al territorio del Estado Requirente.

ARTICULO 10

1. Ningún testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, que, como consecuencia de una citación compareciera ante las autoridades judiciales del Estado

Requirente podrá ser perseguido, detenido o sometido a ninguna restricción de su libertad individual en el territorio de dicho Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado requerido.

2. Ninguna persona cualquiera que sea su nacionalidad, que fuera citada por las autoridades judiciales del Estado Requirente para responder de hechos por los que se sigue el procedimiento, podrá ser perseguida, detenida, o sometida a ninguna otra restricción de su libertad individual por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado Requerido y que no consten en la citación.

3. La inmunidad establecida en el presente artículo cesará cuando el testigo, el perito o la persona encausada haya tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Requirente durante un plazo ininterrumpido de treinta días, una vez que su presencia ya no sea requerida por las autoridades judiciales y, no obstante, permanezca en dicho territorio o regrese a él después de haberlo abandonado.

TITULO IV

ANTECEDENTES PENALES

ARTICULO 11

El Estado Requerido comunicara los extractos o información relativa a antecedentes penales en relación con una persona procesada o juzgada que soliciten las autoridades judiciales del Estado Requirente y sean necesarios en una causa penal.

**TITULO V
PROCEDIMIENTO**

ARTICULO 12

1. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:
 - a) autoridad que formula la solicitud;
 - b) objeto y motivo de la solicitud;
 - c) en lo posible, identidad y nacionalidad de la persona en cuestión;
 - d) nombre y dirección del destinatario, cuando proceda;
 - e) cualquier otra información que posea la autoridad requirente relativa a la solicitud de asistencia.

2. En las comisiones rogatorias que tengan por objeto realizar actos de instrucción, las solicitudes de asistencia mencionarán, además, la inculpación y contendrán una exposición sumaria de los hechos.

ARTICULO 13

1. Las comisiones rogatorias y las solicitudes de asistencia serán cursadas por las Autoridades Centrales de las dos Partes, siendo devueltas por la misma vía acompañadas de los documentos relativos a su ejecución.

2. La Autoridad Central para España será el Ministerio de Justicia (Secretaría General Técnica) y para la República de Panamá será el Ministerio de Gobierno y Justicia (Dirección Nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua).

TITULO VI
INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE SENTENCIAS PENALES

ARTICULO 14

Cada una de las Partes Contratantes informará a la Parte interesada de las sentencias penales y medidas de seguridad posteriores que afecten a los nacionales de esta Parte y que hubieran sido objeto de una inscripción en el Registro de Antecedentes Penales. Las Autoridades Centrales se comunicarán recíprocamente esta información por lo menos una vez al año. A petición expresa, se remitirá copia de la resolución dictada.

ARTICULO 15

En aplicación del presente Convenio, los documentos y traducciones redactados o certificados por tribunales u otras autoridades competentes de cualquiera de las Partes, no estarán sujetos a ninguna forma de de legalización, siempre que estuvieran provistos del sello oficial.

ARTICULO 16

Toda controversia que surgiere de la interpretación o aplicación del presente Convenio se resolverá, en primera instancia mediante consultas entre las Autoridades Centrales, y de no resolverse, se someterá a las Partes por la vía diplomática.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 17

El presente Convenio será ratificado. Entrará en vigor el primer día del segundo mes después del Canje de los Instrumentos de Ratificación.

ARTICULO 18

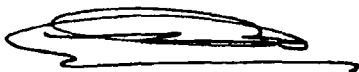
1. El presente Convenio permanecerá en vigor por un plazo ilimitado.

2. Cada una de las Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento y esta denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recibo de su notificación por el otro Estado.

Hecho en Madrid, a los diecinueve (19) días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, en dos originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL REINO DE ESPAÑA,

"a. r."



Abel Matutes Juan

Ministro de Asuntos Exteriores

POR LA REPUBLICA DE PANAMA,



Jorge Eduardo Ritter

Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC
OF PANAMA ON LEGAL ASSISTANCE AND JUDICIAL COOPERATION
IN CRIMINAL MATTERS

The Kingdom of Spain and the Republic of Panama,

Desiring to maintain and strengthen the ties that unite the two countries, particularly in the area of mutual cooperation in criminal matters, have decided to conclude an Agreement to this end, in accordance with the following provisions:

TITLE I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

1. The Contracting Parties undertake to provide each other, in accordance with the provisions of this Agreement, as well as those of their respective legal systems, with the broadest possible legal assistance and judicial cooperation in proceedings relating to conduct which, at the time when assistance is requested, is within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting State.

2. This Agreement shall not apply to detentions, to the enforcement of sentences or to military offences or crimes except where they constitute offences or crimes under ordinary criminal law.

Article 2

1. Assistance may be refused:

(a) If the requested State considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, public policy or other essential interests;

(b) If the request relates to offences or crimes that the requested State considers to be political offences or crimes;

(c) If the offences or crimes that motivated the request are not punishable in the requested State.

2. Reasons shall be given for any refusal of assistance.

TITLE II. LETTERS ROGATORY

Article 3

1. The requested State shall execute, as provided for in its legislation, any letters rogatory relating to a criminal proceeding sent to it by the competent judicial authorities of the requesting State which relate to:

(a) The execution of pre-trial proceedings;

- (b) The transmittal of evidentiary documents;
 - (c) The delivery of objects, files or documents;
 - (d) The service of documents relating to the enforcement of a sentence, the collection of a fine or the payment of court costs.
2. The requested State may limit itself to sending certified true copies of the requested files or documents. However, if the requesting State expressly requests that the originals be sent, such request shall be complied with insofar as possible.

Article 4

When the requesting State expressly so requests, the requested State shall inform it of the date and place of execution of the letter rogatory. The authorities and parties concerned may take part in the act, with the prior consent of the requested State, in accordance with the laws of the last- mentioned State.

Article 5

1. The requested State may postpone the delivery of requested objects, files or documents if it requires them for a criminal proceeding currently in progress.
2. The objects, together with the originals of the files and documents which have been remitted in response to a request for assistance, shall be returned as soon as possible by the requesting State to the requested State, unless the latter expressly waives their return.

**TITLE III. SERVICE OF PROCEDURAL DOCUMENTS AND JUDICIAL DECISIONS,
APPEARANCE OF WITNESSES, EXPERTS AND THE ACCUSED**

Article 6

1. The requested State shall proceed to serve the judicial decisions and the procedural documents sent to it for that purpose by the requesting State. Service or delivery may be effected simply by delivery of the document or the decision to the person to whom it is addressed. If the requesting State expressly so requests, the requested State shall make the delivery in any manner prescribed by its legislation for similar cases, or in any other special manner compatible with that legislation.
2. Service of documents shall be confirmed by a receipt dated and signed by the person named, or by a statement from the competent authority of the requested State stating that service or delivery was effected and indicating the manner and date thereof. One or the other of these documents shall be transmitted immediately to the requesting State.
3. If delivery or service of the documents could not be effected, the requested State shall immediately communicate the reason therefor to the requesting State.
4. Summonses addressed to a person charged with an offence who is in the territory of either State shall be transmitted at least 30 days before the date set for the appearance. To that end, the requesting State shall transmit its request to the requested State with suffi-

cient notice, so that the requested State may comply with the established time limit of 30 days.

Article 7

The witness or expert who fails to obey the summons whose delivery has been requested may not be subjected to any sanction or coercive measure, even though the said summons contains a warrant, unless at a later date, the person entered the territory of the requesting State voluntarily and was duly summonsed again.

Article 8

1. Allowances, travel and subsistence expenses shall be paid to witnesses or experts by the requesting State, in accordance with the rates and rules in force in that State, the amounts thereof being calculated as from departure from the place of residence of the said witnesses or experts.

2. If the requesting State considers that the personal appearance of a witness or expert before its judicial authorities is particularly necessary, it shall so indicate in the request for delivery of the summons, and the requested State shall serve the summons to the said witness or expert. The requested State shall communicate the response of the witness or expert to the requesting State.

3. In the case described in paragraph 2 of this article, the request or summons shall indicate the approximate amount of the allowances payable, as well as that of the travel and subsistence expenses refundable.

Article 9

1. Any person in custody whose personal appearance as a witness or for purposes of a confrontation has been requested by the requesting State shall be transferred temporarily to the territory where the examination will take place, provided that the person is returned within the period specified by the requested State and without detriment to the provisions of article 10, to the extent that they are applicable.

2. The person transferred shall remain in preventive custody in the territory of the requesting State, unless the requested State requests that he be set at liberty.

3. The transfer may be refused:

- (a) If the person in custody does not consent;
- (b) If the person's presence is required for criminal proceedings that are in progress in the territory of the requested State;
- (c) If the transfer might result in the extension of the person's detention; or
- (d) If there are crucial considerations opposed to the transfer to the territory of the requesting State.

Article 10

1. No witness or expert, whatsoever his or her nationality, who appears before the judicial authorities of the requesting State as the result of a summons may be prosecuted, detained or subjected to any restriction of his or her individual liberty in the territory of the last-mentioned State for acts or convictions which preceded his or her departure from the territory of the requested State.

2. No person, whatsoever his or her nationality, who is summonsed by the judicial authorities of the requesting State to answer for the actions which are the subject of the proceedings may be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of his or her individual liberty for acts or convictions which preceded his or her departure from the territory of the requested State and are not specified in the summons.

3. The immunity established in this article shall cease if the witness, the expert or the accused, being free to leave the territory of the requesting State during a continuous period of 30 days, once his or her presence is no longer required by the judicial authorities, nonetheless remains in the said territory or returns after having left it.

TITLE IV CRIMINAL RECORDS

Article 11

The requested State shall transmit any extracts or information relating to the criminal record of an accused or convicted person which are requested by the judicial authorities of the requesting State and are needed for the purposes of a criminal case.

TITLE V PROCEDURE

Article 12

1. Requests for assistance shall contain the following indications:

- (a) The name of the authority making the request;
- (b) The subject of and reason for the request;
- (c) Wherever possible, the identity and nationality of the person in question;
- (d) The name and address of the person to be served, where appropriate;
- (e) Any other information that the requesting authority may have with regard to the request for assistance.

2. In the letters rogatory issued for the purpose of pre-trial proceedings, requests for assistance shall also specify the charges and contain a brief statement of the facts.

Article 13

1. Letters rogatory and requests for assistance shall be sent by the Central Offices of the two Parties, and shall be returned through the same channel, accompanied by the documents relating to their execution.

2. The Central Office for Spain shall be the General Technical Secretariat of the Ministry of Justice, and the Central Office for the Republic of Panama shall be the Department of Mutual Legal Assistance Treaties of the Ministry of Government and Justice.

TITLE VI. EXCHANGE OF INFORMATION ON JUDGEMENTS IN PENAL PROCEEDINGS

Article 14

Each Contracting Party shall inform the interested Party of any judgements in penal proceedings or subsequent security measures that apply to the nationals of the last-mentioned Party and have been recorded in the Criminal Records Registry. The Central Offices shall communicate this information to each other at least once a year. A copy of the decision pronounced shall be transmitted, if expressly requested.

Article 15

In application of this Agreement, the documents and translations prepared or certified by the courts or other competent authorities of either Party shall not require any form of authentication, provided they bear the official seal.

Article 16

Any dispute that may arise in the interpretation or application of this Agreement shall be settled, in the first place, through consultations between the Central Offices and, if it is not settled, shall be submitted to the Parties through the diplomatic channel.

TITLE VII. FINAL PROVISIONS

Article 17

This Agreement shall be ratified. It shall enter into force on the first day of the second month following the exchange of the instruments of ratification.

Article 18

- I. This Agreement shall remain in force indefinitely.
2. Either Contracting Party may denounce it at any time, and this denunciation shall take effect six months after the date on which notification has been received by the other State.

DONE at Madrid, on 19 October 1998, in two originals, in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

ABEL MATUTES JUAN
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Panama:

JORGE EDUARDO RITTER
Minister for Foreign Affairs

[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD D'ENTRAIDE JURIDIQUE ET DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA
RÉPUBLIQUE DU PANAMA

Le Royaume d'Espagne et la République du Panama, désireux de maintenir et de renforcer les liens qui unissent les deux pays, notamment dans le domaine de la coopération en matière pénale, sont convenus de conclure un accord à cette fin, conformément aux dispositions suivantes :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes s'engagent à se prêter, ainsi qu'à leurs systèmes judiciaires respectifs, l'assistance judiciaire la plus ample possible ainsi qu'une coopération pour la réalisation d'enquêtes pour des faits qui, au moment où l'assistance est sollicitée, relèvent de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant.

2. Le présent Accord ne s'applique pas aux détentions, à l'exécution des sentences ni aux infractions de caractère militaire à moins que ces dernières ne constituent des infractions ou des crimes de droit commun.

Article 2

1. L'assistance judiciaire peut être refusée :

a) Si l'État requis considère que l'exécution de la demande serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;

b) Si la demande se rapporte à des infractions ou à des crimes que l'État requis considère qu'ils sont de nature politique;

c) Si les infractions ou les crimes qui ont motivé la demande ne peuvent donner lieu à poursuite selon la législation de la Partie requise.

2. Tout refus d'entraide judiciaire devra être motivé.

TITRE II. COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 3

1. Conformément à sa législation, l'État requis exécute les commissions rogatoires relatives à une procédure pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires compétentes de l'État requérant, concernant

a) L'exécution des procédures préalables au procès;

- b) La communication de documents relatifs à la preuve;
- c) La remise d'objets, de dossiers ou de documents;
- d) La signification relative à l'exécution de la sentence, la perception d'une amende ou le règlement de frais judiciaires.

2. L'État requis peut se contenter de transmettre des copies certifiées conformes des dossiers et des documents réclamés. Toutefois, si l'État requérant devait en faire expressément la demande, tous les efforts devraient être faits pour satisfaire à la demande de documents originaux dans la mesure du possible.

Article 4

Sur demande expresse de l'État requérant, l'État requis informe celui-ci de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire. Sous réserve de l'accord préalable de l'État requis, il sera loisible aux autorités et aux parties intéressées de participer à l'exécution conformément à la législation de l'État requis.

Article 5

1. L'État requis pourra retarder la remise des objets, dossiers ou documents si ces pièces lui sont nécessaires aux fins de procédures pénales en cours.

2. Les objets de même que les originaux des dossiers et des documents qui auront été transmis en réponse à une demande d'assistance seront retournés dans les plus brefs délais par l'État requérant à l'État requis, à moins que l'État requis ne renonce expressément à ce retour.

TITRE III. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS RELATIFS À LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DES TÉMOINS, DES EXPERTS ET DE L'ACCUSÉ

Article 6

1. L'État requis procède à la signification des décisions judiciaires et à la remise des documents relatifs à la procédure qui lui sont envoyés à cette fin par l'État requérant. La signification et la remise peuvent se faire par la simple transmission du document ou de la décision à la personne à laquelle il est adressé. Si l'État requérant en exprime le désir, l'État requis procède à la transmission de la manière prescrite par sa législation dans des cas similaires ou selon des modalités compatibles avec ladite législation.

2. La signification de documents est certifiée par un accusé de réception, daté et signé par le destinataire, ou par une attestation de l'autorité compétente de l'État requis confirmant que la signification ou la remise ont été effectuées tout en indiquant la modalité et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sont transmis immédiatement à l'État requérant.

3. Si la remise ou la signification n'ont pu être effectuées, l'État requis en communique immédiatement les raisons à l'État requérant.

4. Les sommations adressées à une personne accusée d'une infraction qui se trouve sur le territoire de l'un ou l'autre des États est transmise au moins 30 jours avant la date fixée pour sa comparution. À cette fin, l'État requérant transmet sa demande à l'État requis dans des délais suffisants de manière à ce que l'État requis puisse respecter le délai de 30 jours.

Article 7

Le témoin ou l'expert faisant défaut de respecter la sommation dont la remise a été réclamée ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte même lorsque la sommation comporte un mandat d'arrêt à moins qu'à une date ultérieure la personne soit entrée sur le territoire de l'État requérant volontairement et qu'elle soit dûment assignée de nouveau.

Article 8

1. Les indemnités de subsistance et de voyage sont versées aux témoins et aux experts par l'État requérant conformément aux taux et aux règlements en vigueur dans cet État, ces sommes étant calculées à compter du départ du lieu de résidence du témoin et de l'expert.

2. Si l'État requérant considère que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant les autorités judiciaires s'avère particulièrement nécessaire, il en fait part dans sa demande de sommation et l'État requis transmet la réponse du témoin ou de l'expert à l'État requérant.

3. Dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article, la demande de sommation indique le montant approximatif des indemnités payables de même que les frais de voyage et d'entretien remboursable.

Article 9

1. Toute personne détenue dont la comparution en qualité de témoin ou à des fins de confrontation a été demandée par l'État requérant pourra être temporairement transférée sur le territoire où l'examen aura lieu, à condition d'être renvoyée dans les délais précisés par l'État requis et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 10 en autant que celles-ci soient applicables.

2. La personne transférée sera maintenue en détention préventive sur le territoire de l'État requérant, à moins que l'État requis ne réclame sa mise en liberté.

3. Le transfert ne sera pas autorisé :

- a) Si le détenu n'y donne pas son consentement;
- b) Si la présence du détenu est nécessaire aux fins d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'État requis;
- c) Si le transfert peut entraîner la prolongation de la détention, ou encore
- d) Si l'État requis s'oppose au transfert vers le territoire de l'État requérant pour tout motif sérieux.

Article 10

1. Quelle que soit sa nationalité, aucun témoin ou expert qui comparait devant les autorités judiciaires de l'État requérant à la suite d'une sommation ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une quelconque restriction de sa liberté sur le territoire dudit État au titre d'actes ou de convictions antérieurs à son départ du territoire de l'État requis.

2. Quelle que soit sa nationalité, aucune personne sommée par les autorités judiciaires de l'État requérant de répondre d'actes qui font l'objet des procédures ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à une quelconque restriction à sa liberté en raison d'actes ou de convictions qui auraient précédé son départ du territoire de l'État requis et qui ne font pas l'objet de la convocation.

3. L'immunité prévue par le présent article cessera de s'appliquer si le témoin, l'expert ou l'accusé, étant libre de quitter le territoire de l'État requérant au cours d'une période ininterrompue de 30 jours après que sa présence n'y est plus requise par les autorités judiciaires, y demeure néanmoins ou y retourne après l'avoir quittée.

TITRE IV. CASIERS JUDICIAIRES

Article 11

L'État requis communique tout extrait ou renseignements relatifs au casier judiciaire d'un individu accusé ou reconnu coupable qui sont réclamés par les autorités judiciaires de l'État requérant et qui s'avèrent nécessaires aux fins des poursuites pénales.

TITRE V. PROCÉDURE

Article 12

1. Les demandes d'assistance contiennent les indications suivantes :

- a) Le nom de l'autorité compétente de qui émane la demande;
- b) L'objet et la raison de la demande;
- c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne dont il s'agit;
- d) Le nom et l'adresse de la personne faisant l'objet de la signification (selon le cas);
- e) Toutes autres informations relatives à la demande d'assistance que l'autorité requérante pourrait avoir en sa possession.

2. Dans les lettres rogatoires émises dans le cadre des procédures préalables au procès, les demandes d'assistance préciseront également les chefs d'accusation ainsi qu'un bref exposé des faits.

Article 13

1. Les lettres rogatoires et les demandes d'assistance sont adressées à l'Office central des deux parties et sont retournées par la même voie avec les documents relatifs à leur exécution.

2. L'Office central d'Espagne sera le Secrétariat général technique du Ministère de la Justice et l'Office central de la république du Panama sera le Département des traités d'assistance judiciaire mutuelle du Ministère du Gouvernement et de la Justice.

TITRE VI. ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR LES JUGEMENTS PÉNAUX

Article 14

Chaque Partie contractante informe la partie intéressée de tout jugement rendu à l'occasion de procédures pénales ou des mesures de sécurité subséquentes applicables aux ressortissants de la dernière partie visée et qui a été consigné au Registre de l'identité judiciaire. Les offices centraux se communiquent cette information au moins une fois l'an. Un exemplaire de la décision prononcée sera transmise sur demande.

Article 15

En application du présent Accord, les documents et traductions rédigés ou certifiés par les tribunaux ou les autres autorités compétentes de l'une ou l'autre des parties sont dispensés de toute forme d'authentification sous réserve qu'ils comportent un sceau officiel.

Article 16

Tout différend qui pourrait résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé initialement par voie de consultation entre les offices centraux; à défaut d'un règlement à ce niveau, le différend sera soumis aux parties par la voie diplomatique.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

Article 18

1. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période indéfinie.

2. L'une ou l'autre des parties peut dénoncer l'Accord en tout temps; une telle dénonciation deviendra effective six mois suivant la date à laquelle une notification à cet égard aura été reçue par l'autre État.

Fait à Madrid le 9 octobre 1998, en double exemplaire en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :
Le Ministre des affaires étrangères,
ABEL MATUTES JUAN

Pour la République du Panama :
Le Ministre des affaires étrangères,
JORGE EDUARDO RITTER

